

DEL ALFONSINISMO AL KIRCHNERISMO. EL MOVIMIENTO OBRERO BAJO LA DEMOCRACIA (1983-2012)

ALEJANDRO M. SCHNEIDER*

La sociedad argentina y, en particular, la clase obrera han atravesado una significativa transformación en las últimas tres décadas. Durante ese período se produjeron importantes cambios materiales y subjetivos que impactaron en el accionar del movimiento obrero. En el transcurso de esos años, la relación entre las distintas administraciones gubernamentales con la dirigencia sindical no fue homogénea. Si bien este vínculo presentó diversas aristas, una de las formas en las que se puede apreciar esta manifestación fue, por una parte, en el constante ir y venir que atravesó la Confederación General del Trabajo (CGT) con las diferentes gestiones presidenciales. Por otra parte, en el permanente vaivén de unidad y quiebre que experimentó la central sindical.

Por otro lado, no menos trascendente fueron las alteraciones que soportó el mercado laboral. Aunque en términos de ocupación, las cifras de la población económicamente activa fueron variando, continuaron estando vigentes determinadas características que se incorporaron en la década del noventa como la precarización del empleo.

En este sentido, por la amplitud de su trama, estas problemáticas necesitan ser estudiadas en forma pormenorizada; sin embargo, frente a la brevedad que impone el presente artículo, aquí sólo se esbozarán algunas cuestiones.

De la primavera alfonsinista al Plan Primavera

Las elecciones democráticas de 1983 permitieron el acceso de Raúl Alfonsín, el candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), a la primera magistratura de la Nación. Por ese entonces, la política socioeconómica de la dictadura había provocado profundas modificaciones en la sociedad; sobre todo, el peso numérico de los trabajadores industriales en la población económicamente activa había descendido mientras se había incrementado la cantidad de asalariados en el área de servicios.

A pocos días de asumir el gobierno, el presidente envió al Congreso su Proyecto de Reordenamiento Sindical diseñado por el Ministro de Trabajo, Antonio Mucci. El mismo se esbozó en consonancia con la denuncia, efectuada durante la campaña electoral, sobre la existencia de un pacto militar-sindical.¹ Además, se hizo con el argumento de que las entidades gremiales eran uno de los principales poderes corporativos que había que democratizar. De esta manera, la propuesta de ley

* Doctor en Historia. Profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires.

¹ El abril de 1983, Raúl Alfonsín (candidato electoral por el radicalismo) denunció la existencia de un acuerdo entre sectores de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas con algunos dirigentes sindicales. Dicho pacto establecía la devolución de los gremios a sus antiguas conducciones a cambio del compromiso de no investigar ciertos actos perpetrados durante el régimen de facto.

aspiró a facilitar el acceso a diferentes corrientes políticas a la conducción laboral, posibilitando la incorporación de representantes por mayoría y minoría en la totalidad de las instancias organizativas.

El proyecto fue acompañado por un conjunto de agrupaciones que habían conformado la Mesa de Enlace Gremial, entidad sindical compuesta principalmente por el Encuentro Nacional de Trabajadores (ENTRA) y el Movimiento Nacional de Renovación Sindical (MNRS). Sin embargo, la mayoría de la dirigencia sindical, orientada por el peronismo, consideró que la norma era un serio intento de injerencia del Estado en las cuestiones laborales. En esa coyuntura, los principales referentes gremiales del justicialismo decidieron reunificar la CGT en torno a una dirección colegiada integrada provisoriamente por cuatro secretarios generales: Saúl Ubaldini (Cerveceros), Osvaldo Borda (Cauchos), Ramón Baldassini (Correos) y Jorge Triaca (Plásticos).² A pesar de las diversas reuniones mantenidas entre los distintos bloques partidarios del Poder Legislativo para poder dar sanción a la ley, la propuesta fue rechazada en la Cámara de Senadores (Senén González y Bosoer, 2009).

En ese contexto, la derrota condujo a una drástica modificación de la política laboral de Alfonsín: esta pasó de la confrontación a la negociación. Entre otros temas, nombró como su delegado personal ante la cúpula gremial al líder fideero Hugo Barrionuevo; por otra parte, reemplazó al ministro del área: en lugar de Mucci designó a Juan Manuel Casella. De este modo, la principal tarea que encaró fue la de coordinar, con la hasta entonces denostada dirigencia laboral, el proceso de normalización sindical en las entidades de primer y segundo grado. Si bien el proceso electoral fue restrictivo, puesto que no permitió la participación de nuevos activistas, en algunas entidades fueron derrotados ciertos personajes que habían tenido un comportamiento cómplice con la dictadura. Asimismo, se lograron cambios a nivel de las seccionales, entre otras, en el gremio de la construcción de Neuquén y en Sanidad de Capital Federal. Aunque, en términos generales, el control de la denominada burocracia sindical continuó estando presente en la mayoría de los gremios.

En cuanto a los conflictos laborales es notable el incremento de los mismos a partir de 1983. Es evidente que, ante el inicio de la democracia, los trabajadores aprovecharon la ocasión para plantear sus reivindicaciones en torno al pedido de mejoras salariales como las demandas a favor de la reincorporación de aquellos obreros que se encontraron cesanteados por la dictadura.

Por otro lado, durante este período, en reiteradas circunstancias, el gobierno intentó crear, mediante diversas negociaciones con representantes empresarios y laborales, un mecanismo de concertación para acordar distintos temas económicos. En lo que respecta a la dirigencia gremial, se intentó consensuar cuestiones referentes a salarios, condiciones de trabajo, leyes de convenios colectivos, de asociaciones profesionales y de obras sociales; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, terminaron en rotundos fracasos. Por entonces, la CGT comenzó a tomar conciencia de la fuerza que poseía a la hora de negociar. Esto lo demostró por medio de la realización de trece paros generales; el primero de ellos, en septiembre de 1984, condujo a que el presidente reemplace a Casella por Barrionuevo (Gaudio y Thompson, 1990).

El anterior, no fue el único cambio en el gabinete presidencial. A fines de febrero de 1985, en la cartera de Economía, Bernardo Grinspun fue sucedido por Juan Vital Sourrouille. Este último, meses más tarde, anunció una serie de medidas antiinflacionarias (el Plan Austral) sobre la base de la

² Si bien la CGT permaneció formalmente unificada, la presencia de distintas corrientes de pensamiento implicó la existencia de diferentes posiciones políticas frente al gobierno radical.

creación una nueva moneda, el congelamiento de precios y salarios, el incremento en las tarifas de los servicios públicos, entre otras disposiciones. Si bien, en un primer momento la reacción de la cúpula sindical fue de cautela, poco a poco, esta postura fue cambiando al calor de las consecuencias negativas del programa económico y de las rípidas discusiones entre Alfonsín y Ubaldini.

De manera simultánea, uno de los efectos inmediatos del Plan Austral fue que algunas empresas redujeron sus costos laborales mediante suspensiones, despidos, argumentando el congelamiento de precios. En ese marco, por ejemplo, el 26 de junio los operarios de la Ford -al margen de la conducción del sindicato- ocuparon la planta del General Pacheco. Durante varias semanas se desató un conflicto en el marco de asambleas internas conducidas por una Comisión Interna que intentó reincorporar a los trabajadores cesanteados. No obstante, pese a la solidaridad recibida, a mediados de julio, las fuerzas de seguridad ingresaron al establecimiento desalojando brutalmente a sus operarios (Molinero, 2013).

A pesar de esta derrota, en los siguientes años se produjo un incremento en las medidas de fuerza; en particular, aumentaron las demandas por salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo, sobre todo, en el sector público. Por su parte, al compás del deterioro de la situación económica, la CGT expuso su “Programa de 26 puntos”, que pretendió ser una alternativa a la propuesta gubernamental. En su declaración figuraba una moratoria para el pago de los intereses de la deuda externa, un incremento de salarios, medidas para garantizar pleno empleo, créditos para la industria y suba de haberes para los jubilados, entre otros reclamos. Como parte de ello, la cúpula sindical dispuso el 29 de agosto de 1985 un tercer paro general con movilización a Plaza de Mayo, en donde se reunieron unas 120.000 personas. Asimismo, el Consejo Directivo de la central obrera ratificó como único secretario general, hasta la normalización de la entidad, al dirigente cervecero.³

En este escenario, con la figura de Ubaldini en su cenit, la CGT convocó a la realización de cuatro huelgas generales durante 1986. Sin embargo, esto no alcanzó a contener las fuertes críticas que recibió la dirigencia por parte de los gremios estatales y las delegaciones regionales, por la tibieza de las medidas de fuerza adoptadas en esos años. Las discrepancias reflejaron, en cierta manera, la heterogeneidad reinante en la conducción de la central obrera; por entonces, en la cúpula convivieron (en forma no poco tensa) el ubaldinismo, el Movimiento Sindical Peronista Renovador (MSPR) -identificado con el ala renovadora del justicialismo- y las 62 Organizaciones -encabezada por el metalúrgico Lorenzo Miguel-. Lejos de conformar un bloque único de ideas, cada sector tuvo su particular mirada y aspiración tanto frente al gobierno como a la interna existente en el peronismo. Asimismo, corresponde observar que los posicionamientos no eran rígidos; constantemente se produjeron, por motivos políticos y personales, deslizamientos entre los diferentes grupos.

De este modo, a comienzos de 1987, en el marco de la octava huelga general dirigida por la CGT, algunos dirigentes, identificados como el grupo de los “15” (electricistas, municipales, textiles, bancarios, portuarios, gráficos, comercio, sanidad, mecánicos, etc.) establecieron un diálogo fluido con el Poder Ejecutivo. Como consecuencia, en marzo, Alfonsín incorporó como ministro del área al dirigente de Luz y Fuerza, Carlos Alderete; su ingreso representó beneficios en ambos sentidos.

³ Finalmente el congreso normalizador de la CGT del 7 de noviembre de 1986 designó en forma oficial a Ubaldini como Secretario General. Cabe indicar que el encuentro, además de reconocer el papel del líder cervecero, implicó un reparto explícito de cargos en la conducción de la central laboral de acuerdo con el peso gremial de cada una de las corrientes existentes dentro del sindicalismo.

Por un lado, bajo su gestión no se realizaron paros generales; por el otro, la dirigencia sindical avanzó en diversos temas que les preocupaban, y que no se habían resuelto desde el inicio de la democracia. Entre estos se destacaron las leyes sobre asociaciones profesionales, los convenios colectivos y las obras sociales. Sin embargo, el panorama para el gobierno radical tuvo un nuevo giro negativo con la derrota electoral en los comicios de septiembre de 1987. Frente al escenario abierto, el presidente nombró a Ideler Tonelli como Ministro de Trabajo en reemplazo de Alderete. Por su parte, la recuperación del justicialismo –de la mano de los renovadores- hizo que el aparato partidario sustituyese lentamente el protagonismo del sindicalismo en el papel de oposición (Belardinelli, 1994).

En esa coyuntura, si bien la CGT exhortó a nuevas huelgas generales, éstas carecieron de la fuerza y del poder de movilización de los que habían gozado en tiempos pretéritos (Iñigo Carrera, 2001). Pese a este escaso nivel de convocatoria, los últimos años de la administración radical se caracterizaron por tener un incremento en el nivel de protesta en comparación con los anteriores. Entre los conflictos más importantes se destaca el paro docente que tuvo una amplia repercusión en el conjunto de la sociedad, con una masiva participación en los tres niveles de enseñanza. La activa adhesión se logró por medio de plebiscitos, la coordinación de escuelas y colegios, cortes de calles y marchas multitudinarias, etc.

Corresponde observar que el aumento en la cantidad de conflictos estuvo en consonancia con el regreso de las discusiones paritarias libres; tras más de una década de suspensión, los asalariados volvieron a sentirse amparados bajo las leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo y de Asociaciones Profesionales. El rápido fracaso del Plan Primavera, nacido en agosto de 1988, con la consiguiente hiperinflación, condujo a una situación de descontento generalizado entre los sectores más empobrecidos de la población. A la importante cantidad de medidas de fuerza en demanda de incrementos de haberes y en defensa de las fuentes de trabajo se sumaron, en los primeros meses de 1989, la realización de saqueos a supermercados en búsqueda de alimentos en algunas ciudades. Frente a ese escenario, Alfonsín adelantó la entrega del gobierno al presidente Carlos Menem (Pozzi y Schneider, 1994).

La década de las reformas laborales

A escasas semanas de asumir su mandato, el nuevo gobierno justicialista aplicó en forma sistemática las pautas aconsejadas por el Consenso de Washington. En poco tiempo, Menem implementó un conjunto de medidas económicas que apuntaron a una mayor apertura externa comercial junto con una amplia gama de privatizaciones de una importante cantidad de empresas públicas. Los efectos de estas disposiciones fueron rápidamente sentidos: hubo una drástica mutación del mercado de trabajo que tuvo su correlato en el incremento de los índices de desocupación, subempleo y sobreocupación. Este proceso socioeconómico, a su vez, fue seguido por un aumento de la actividad industrial, con una menor ocupación laboral.

En consonancia con lo anterior, se modificaron diversos instrumentos legales; así, en el marco de Ley de Emergencia del Estado, se alteraron las normas que garantizaban la permanencia de los empleados estatales, a la vez que se aplicaron ciertos límites al derecho de huelga en los servicios públicos. Por otro lado, se cambió la normativa sobre los contratos de empleo; en ese sentido, se generalizó su duración por tiempo determinado, se instituyeron períodos de prueba de entre tres y seis meses (se convalidó el despido sin motivo y sin indemnización) y se redujeron los montos en

concepto de indemnización, etc. En cuanto a las negociaciones colectivas, se autorizó a que las partes intervinientes eligieran el nivel de negociación, se concedieron subas salariales sujetas al incremento de los niveles de productividad, se habilitó el pago del salario en vales de comida, se realizaron modificaciones en lo referente a las obligaciones empresariales frente a los accidentes de trabajo, entre otras cuestiones.

La década del noventa fue testigo del desvanecimiento del sistema centralizado de negociaciones colectivas, pieza característica de las relaciones industriales en Argentina desde los años cuarenta. En concordancia con el aumento de los índices de desocupación y subempleo, los empleadores aprovecharon la descentralización laboral para flexibilizar las condiciones contractuales y de trabajo. En ese lúgubre escenario, se modificó la base estructural de los acuerdos: un notable número de convenios fueron firmados a nivel de las empresas. No obstante, hubo casos donde las entidades preservaron las disposiciones de los convenios firmados en forma previa al ajuste económico de Menem; para eso aplicaron las cláusulas de ultraactividad por medio de las cuales los convenios mantuvieron su validez, hasta la firma de un nuevo pacto.

En este escenario se fue cambiando el tradicional modelo fordista de organización de la producción mediante la implementación de la polifuncionalidad de tareas, el trabajo en equipo y la rotación interna laboral en diferentes puestos y oficios. Este fenómeno se acompañó con un proceso de terciarización de actividades dentro de las empresas a través de un uso extensivo de contratos precarios por medio de agencias de empleo.⁴ En general, estas modalidades de empleo apuntaron a desgastar el poder de organización de los asalariados en los propios lugares de trabajo. Más aún, en determinados ámbitos se produjo un quiebre entre los trabajadores de una misma empresa, propiciando distinciones en torno al monto de los salarios percibidos y las condiciones de labor.

La precariedad laboral se manifestó no sólo con la contratación de las tareas sino también en la forma en que se generalizó el pago de haberes en “negro”. En íntima vinculación con estas prácticas, el uso de subcontratos de personal derivó en que estos empleados debieran hacerse cargo por sí mismos de la seguridad social y de la salud, eximiendo a los empresarios de asumir esa responsabilidad. La generalización de esta modalidad incidió en la conformación de una importante camada de trabajadores que, juntos con sus familias, pasaron a carecer de algún tipo de protección en materia de estos servicios. En un contexto signado por la privatización del sistema de salud y del régimen previsional de jubilaciones, esto se tornó más grave.

De esta manera, la modificación del mercado de trabajo impactó negativamente en la capacidad de presión y de negociación de los sindicatos. Además, la precarización facilitó la imposición de la disciplina patronal sobre los trabajadores, desalentando la organización y la lucha en los lugares de trabajo. En idéntico sentido, este panorama se expresó en una importante caída en el nivel de afiliación de las entidades laborales.

No fue ajeno a este proceso el comportamiento de la mayoría de la cúpula sindical. La flexibilización del mercado laboral junto con la ofensiva generalizada del capital sobre los asalariados fue acompañada con una estrategia de negociación y de cooptación hacia la dirigencia. De este modo, no pocos líderes gremiales acentuaron su compromiso con el modelo reinante erigiéndose como *sindicalistas empresarios*, participando en las privatizaciones de las empresas públicas, en la

⁴ En este marco, el asalariado por locación pasó a no formar parte de la planta efectiva de la compañía; por lo tanto, no se lo acogió a los beneficios y protecciones legales que otorgaban los convenios por industria.

desregulación de las obras sociales, en la creación de fondos de pensión y aseguradoras de accidentes de trabajo y en la contratación precaria de trabajadores. En forma clara, estos dirigentes se fueron consolidando como burócratas: conformando una capa social con una orientación capitalista en el seno del movimiento obrero, con intereses de clase cada vez más alejados de sus representados (Gighliani, Grigera y Schneider, 2012).

A pocos meses de iniciada la presidencia de Menem, la CGT terminó fraccionándose en dos sectores frente a las medidas implementadas.⁵ La tendencia predominante fue la de adaptarse a la nueva situación política, priorizando la preservación de los beneficios corporativos; en particular, con el control de los recursos financieros de las obras sociales. Con la aceptación de las medidas neoliberales, el gobierno peronista obtuvo una cierta legitimidad, en el campo sindical, para la aplicación de su política económica (Murillo, 1997).

Frente a esta postura de adaptación, en el transcurso de esos años nacieron nuevos agrupamientos gremiales que cuestionaron las políticas neoliberales. Por una parte, un conjunto de agrupamientos de sindicatos públicos encabezados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), junto con los docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), crearon en 1992 el Congreso de los Trabajadores Argentinos, que en 1996 desembocó en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Por otra parte, entidades lideradas por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y por el sindicato de los camioneros conformaron, en 1994, un grupo autónomo dentro de la CGT: el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Finalmente, con un menor peso gremial pero con un elevado impacto político, también en 1994, nació la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Desde su origen, la CTA se planteó construir un sindicalismo autónomo respecto del Estado, los partidos políticos y los grupos empresariales. Además, incorporó a desocupados, empleados temporarios y cuentapropistas y acogió a agrupaciones de base territorial. En idéntico sentido, permitió la afiliación de comisiones internas y de trabajadores en forma individual.⁶ Durante esos años convocó a una serie de actividades opositoras: la campaña del millón de firmas contra la jubilación privada en 1993, la marcha federal en 1994, el apagón multisectorial en 1997, entre otras acciones. Por otro lado, el antagonismo respecto a la gestión gubernamental de Menem condujo a varios dirigentes de esta central a adherir a los postulados del gobierno aliancista de Fernando de la Rúa. Sin embargo, frente a la visualización de las continuidades con las políticas económicas neoliberales, la CTA regresó al campo opositor (Palomino, 2000).

El MTA agrupó a cerca de treinta entidades laborales, prevaleciendo, sobre todo, los sindicatos del transporte, siendo sus principales referentes Hugo Moyano (camioneros), Juan M. Palacios (colectiveros) y Alicia Castro (aeronavegantes). Ante el acercamiento de la mayoría de la cúpula cegetista al gobierno, este agrupamiento se propuso desplazar a dicha conducción con el objetivo de retomar los lineamientos del tradicional sindicalismo peronista. De esta manera, retomaron tanto las clásicas formas de intervención gremial (el “golpear para negociar”) como los postulados ideológicos

⁵ La primera partición se produjo en octubre de 1989, cuando emergió la CGT de Azopardo, encabezada por Ubaldini, y la CGT San Martín, liderada por el mercantil Güerino Andreoni. En 1992 estos sectores se reunieron; pero poco tiempo después hubo nuevos desprendimientos sindicales.

⁶ El problema de la desocupación se canalizó en gran medida con la creación de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV). Esta se destacó por efectuar numerosos cortes de rutas y calles como forma de protesta para hacer oír sus reclamos.

próximos a una concepción intervencionista en la economía que asumiera medidas redistributivas de ingreso en beneficio a los asalariados. Cabe observar que, en determinadas circunstancias, la postura de este sector terminó acercándose momentáneamente a la dirección de la CGT, como sucedió durante el congreso de la Central en 1996 cuando se eligió a Rodolfo Daer (alimentación) como Secretario General, acompañado por Palacios como Adjunto. Así, la postura del MTA alternó entre convivir con la dirigencia aliada a Menem o alejarse de ella para terminar conformando la “Mesa de Enlace” con la CTA, la CCC y la regional San Lorenzo de la CGT en 1995 (Ferrer, 2005).

Por último, la CCC surgió en el norte del país en torno a la figura de Carlos Santillán del gremio de los municipales de Jujuy. Si bien no hubo numerosas entidades sindicales en su redil, su presencia se hizo sentir (sobre todo en las provincias) por la metodología disruptiva de sus luchas a través de ocupaciones de edificios públicos y por los enfrentamientos con la policía. Asimismo, la organización articuló algunas de sus protestas con otros grupos como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). En lo que respecta a sus posturas políticas, en todas las presidencias de la década del noventa, fue consecuente su enfoque antagónico con el poder.

A partir de la década de 1990 la cantidad de conflictos gremiales tendieron a una disminución en su número. Primero, al compás de la crisis hiperinflacionaria y, luego del abrupto proceso desregulador de la economía, se produjo un reordenamiento de la acumulación de capital a favor de los sectores dominantes más concentrados, lo que repercutió en una fuerte ofensiva sobre el conjunto de los asalariados. Todo esto en un escenario donde el primer mandatario se autoproclamó justicialista, mientras un sector de la dirigencia sindical avaló y participó en esta transferencia de ingresos.

Como consecuencia, durante los primeros años del gobierno de Menem, las principales protestas estuvieron dirigidas a detener la caída salarial en términos reales y a la defensa de las empresas públicas; algunos de los conflictos más resonantes fueron protagonizados por los ferroviarios, los obreros telefónicos y los metalúrgicos de Somisa. Posteriormente, las medidas de fuerza giraron alrededor de las cesantías y suspensiones, los atrasos en los pagos de haberes, entre otros reclamos. Cabe indicar que el crecimiento de los despidos se produjo tanto en el sector público como en el privado. En el primero de los casos, la drástica expulsión de mano de obra se debió a las desregulaciones de las empresas estatales, mientras que en el ámbito privado, la pérdida de empleos se generó tanto por la reconversión productiva (sobre todo, en la industria) como por la apertura de la economía. Por entonces, además, se produjo una importante cantidad de protestas con un alto nivel de enfrentamiento; una proporción notable de ellas se desplegaron por fuera y -en varias oportunidades en contra- de las conducciones gremiales.

Por otro lado, desde 1993, los enfrentamientos sociales se agudizaron en el ámbito regional y provincial: la protesta en Santiago del Estero, con el incendio de la sede de gobierno, los tribunales, la legislatura, las residencias de políticos locales, entre otros sitios, fue una de sus máximas expresiones de descontento. A partir de 1995, como resultado de la recesión provocada por el “efecto tequila”, los conflictos, que tendieron a disminuir en términos numéricos, giraron en torno a la defensa de la fuente de empleo. El aumento de la desocupación y el subempleo, las transformaciones en la estructura de calificaciones, el incremento de productividad laboral, la precarización de los contratos y la tercerización de actividades en las empresas actuaron como factores que incidieron en el accionar defensivo y atomizado que adoptó la clase trabajadora. A pesar de ello, los empleados estatales (nacionales y provinciales) protagonizaron una notable cantidad de protestas ante los recortes salariales, por demoras en el pago de haberes y por la mejora en las

condiciones de trabajo. Dentro de este sector, la mayor cantidad de medidas de fuerza la llevaron a cabo los docentes; entre otras acciones, una de las más impactantes en la población, fue la instalación de la “Carpa Blanca” frente al Congreso de la Nación, entre abril de 1997 y diciembre de 1999, en reclamo de una ley nacional que garantizase un fondo para la educación pública (Vázquez, 2005).

En medio de este panorama, las centrales obreras acordaron, en diferentes circunstancias, efectuar medidas en común; entre otras, en 1994, se desarrolló la Marcha Federal sobre todo el territorio nacional. O bien, en 1996, se convocaron a tres huelgas generales contra la política laboral del gobierno.⁷ Asimismo, la crisis económica en las provincias derivó en puebladas de localidades que vivían de la actividad petrolera como Cutral-Co, Plaza Huincul, Tartagal y General Mosconi. Al calor de estas protestas nacieron los fogoneros y los piqueteros que, a la metodología de los paros y huelgas, sumaron sus cortes de calles y rutas. De este modo, la protesta territorial de los desempleados condujo a la conformación de nuevas organizaciones denominadas en forma genérica como “Movimientos de Trabajadores Desocupados” (Svampa y Pereyra, 2003). Por otra parte, entre las renovadas formas de respuestas a la crisis económica y social, a fines de los noventa comenzaron a conformarse las empresas recuperadas. Así, cerca de un centenar de establecimientos administrados en manos de sus propios trabajadores buscaron dar solución al cierre de sus fuentes de empleo. Si bien estas compañías carecieron de un fuerte impacto significativo en términos de producción y de cantidad de obreros ocupados, en cambio sí repercutieron en cuanto a su papel político y simbólico.

Durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001) se continuó con el esquema económico del menemismo. En ese sentido, se profundizó ese camino con la sanción de la polémica reforma laboral propiciada por la denominada “Ley Banelco”.⁸ En tanto, la política de deterioro salarial prosiguió con la gestiones de José L. Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo. Frente a ello, las principales medidas de fuerza se desarrollaron en los gremios estatales y en los diferentes movimientos de desocupados.

En esa coyuntura, en el año 2000, la central obrera se dividió en dos sectores: uno oficial, dirigido por Daer, y el otro, la CGT disidente, liderado por Moyano.⁹ A pesar de ese fraccionamiento, en el transcurso del gobierno de la Alianza se efectuaron nueve huelgas generales convocadas por una o ambas entidades laborales. Por su parte, entre otras actividades, la CTA junto con diversas organizaciones sociales, organizó la Marcha del Frente Nacional contra la Pobreza, cuyo objetivo fue realizar una consulta popular para la implementación de un seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desocupados junto con una asignación universal para cada hijo menor que cubriera a todos los trabajadores. En un escenario de creciente conflictividad social y de

⁷ Corresponde indicar que en el transcurso de la década del noventa se desarrollaron nueve huelgas generales convocadas por las diferentes central obreras.

⁸ Se conoce popularmente como Ley Banelco a la norma que surgió tras un supuesto soborno pagado por el gobierno de la Alianza a un grupo de Senadores peronistas para que voten a favor de la mencionada reforma legislativa.

⁹ Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, el MTA se articuló con otros gremios conformando la CGT disidente. La misma coexistió con la central dirigida por Daer hasta que ambas se unificaron bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

carencia de legitimidad popular, con elevados niveles de represión, el presidente de la Rúa renunció en diciembre de 2001.¹⁰

Tras la caída del mandatario radical, se sucedieron cuatro presidentes que intentaron recomponer la crisis institucional. El último de ellos, Eduardo Duhalde, logró en cierta forma apaciguar la situación tras una serie de acuerdos con la dirigencia sindical. Sin embargo, no consiguió lo mismo con los trabajadores desocupados quienes continuaron protestando, e incluso, sufrieron una brutal represión policial que costó la vida de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán en junio de 2002.

Rupturas y continuidades en el modelo laboral durante la denominada “década ganada”

A partir del 2003, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se produjo, en términos globales, una reactivación de los conflictos protagonizados por la clase obrera. Este resurgir no sólo se manifestó en la relevancia que adquirió la principal central laboral sino también en el papel destacado que cumplieron diferentes organizaciones de base en este proceso; sobre todo, los delegados y las comisiones internas que sostuvieron los conflictos más impactantes del período.

Uno de los principales elementos para entender la situación laboral fue que coincidió con una fase de incremento de la actividad económica la cual permitió una importante incorporación de asalariados a la producción. No obstante, en esos años siguió siendo muy elevado el número de trabajadores del sector informal que convivió con aquellos que tenían empleo registrado. De esta forma, a pesar del incremento del empleo en la década, una de las principales características del mercado de trabajo en la Argentina fue que, para el año 2012, el 53,6% de la fuerza laboral se encontraba precarizada (Lozano, 2012).

Por otro lado, la situación debe ser enmarcada dentro del propio armado político efectuado por Kirchner. La búsqueda de un acuerdo estable con la CGT fue uno de sus pilares centrales a la hora de comenzar a construir su legitimidad y su proyecto de gobierno sostenido -en parte- en tratar de incrementar la capacidad del consumo mientras estimulaba el aparato productivo. Por su parte, la central obrera también obtuvo numerosas ventajas tanto frente a otros actores políticos como las organizaciones piqueteras, como frente a la CTA. Al respecto, corresponde observar que esta última desempeñó un escaso papel con el renacimiento de la protesta laboral; más aún, en el transcurso de esos años, sus líderes comenzaron a pelearse en torno a la postura a adoptar frente a la política oficial. En el 2004, con la anuencia del ex mandatario se reunificó la CGT, primero conformando una conducción tripartita y luego con un secretariado unificado tras la figura de Moyano. El acuerdo logrado en el seno de la central laboral fue un hecho político significativo, ya que casi la totalidad de los trabajadores sindicalizados se encontraban enrolados en sus filas (Etchemendy y Collier, 2007).

En cuanto a los conflictos gremiales, la mayoría fueron en demanda de una mejora en la recomposición salarial. Con el fin del régimen de convertibilidad se produjo una apertura de la puja distributiva a través de negociaciones colectivas. Los convenios revitalizaron el papel de las entidades

¹⁰ Es necesario recordar que comenzó su mandato con una fuerte represión en Corrientes, a lo que siguió el asesinato de Aníbal Verón en General Mosconi en noviembre del 2000. A esto deben sumarse las más conocidas muertes de diciembre de 2001.

sindicales, la Ley de Ordenamiento Laboral otorgó preeminencia a la negociación de nivel superior por sobre los grados inferiores. A partir de entonces, subió el número de convenios que tendieron a renovarse anualmente; las paritarias se extendieron hacia todos los sectores y ramas de actividad. Sin embargo, no todos los asalariados percibieron idénticas mejoras en sus ingresos. Así, hubo diferencias en cuanto si se hallaban registrados o no; de este modo, continuó existiendo un conjunto significativo de trabajadores informales que estuvieron por fuera de lo dispuesto por las paritarias.

A las conducciones sindicales la negociación colectiva les permitió recuperar cierta credibilidad frente a los afiliados; asimismo, gracias a su acercamiento a Kirchner, varios representantes laborales se incorporaron en los consejos directivos de empresas de servicios que regresaron a manos del Estado, como en el caso de las compañías de correo y la de provisión de agua.¹¹ Es evidente que la dirigencia logró estos acuerdos como parte del intercambio de favores que mantuvo con el gobierno: era necesario controlar la protesta y la movilización de las bases, aceptando las pautas salariales fijadas por la cartera económica, aceptando explícitamente cláusulas de paz social. Algunos de los convenios firmados con las entidades más importantes tuvieron una amplia expresión política, ya que fueron rubricados en la Casa Rosada con la participación del extinto mandatario.

En relación con la conflictividad laboral, un segundo tipo de protesta que se desplegó fue en demanda de efectivizar a aquellos asalariados que se encontraban precariamente contratados. Este fue un reclamo que cruzó todo el período, comprendiendo tanto a empleados estatales como a privados. Algunas de las medidas de fuerza más impactantes la protagonizaron los trabajadores de subterráneos, ferroviarios, telefónicos, neumáticos, entre otros. Por otro lado, hubo medidas de fuerza por mejorar las condiciones de trabajo (Astilleros Río Santiago), por reducción del impuesto a las ganancias (petroleros), por la participación en los beneficios de las empresas (neumáticos), etc. Ante esto, uno de los elementos característicos que se observó es que, por lo general, las peticiones salariales se canalizaron a nivel de las entidades por rama, mientras que las restantes demandas nacieron y se desarrollaron en los lugares de empleo (Schneider, 2013).

Por otra parte, cabe observar que en el transcurso de estos diez años no fue homogéneo el número de conflictos desplegados; así, durante el primer mandato presidencial de Fernández hubo una disminución en la cantidad de enfrentamientos, entre otros motivos, por las distintas crisis (nacionales e internacionales) que sostuvo su gestión.

En este escenario emergieron nuevas organizaciones de base que se caracterizaron por enfrentar y desafiar el liderazgo a los antiguos dirigentes sindicales. Al calor de las protestas de esos años, surgieron tanto nuevas entidades (como la asociación gremial que enrola a los trabajadores del subterráneo y del premetro) como el recambio en la conducción de algunas seccionales (por ejemplo, dentro del sindicato del neumático). Asimismo, se produjo una importante recomposición de cuerpos de delegados y comisiones internas en distintas empresas fabriles: The Value Brand Company, Tango Meat, Crónica, Kraft, Pepsico Snacks, etc.¹² Por otro lado, entre sus principales características se encuentra que estos organismos de base fabril son conformados por activistas

¹¹ También la cúpula gremial se benefició por la participación en la Superintendencia del Sistema de Salud, organismo que controla el funcionamiento del sistema de obras sociales. En idéntico sentido, algunas entidades lograron ventajas particulares como el gremio camionero que se hizo acreedor de acciones en la reprivatización del ramal de transporte de cargas de la línea ferroviaria Belgrano.

¹² Si bien esto último sigue siendo un proceso minoritario en términos numéricos, su impacto social es muy notable cuando estos nuevos organismos protagonizan una medida de fuerza.

jóvenes con escasas experiencias laborales en la década del noventa y que, además, carecen de una clara identificación política e ideológica (Varela, 2013).

En otro orden de cuestiones, cabe observar que durante esta última década la relación del gobierno con la dirigencia sindical no fue homogénea. Desde los inicios del mandato de Kirchner hasta mediados del primer gobierno de Fernández la relación con Moyano, el principal referente sindical, se mantuvo en forma estable sobre la base de mutuos acuerdos.¹³ Sin embargo, a raíz de una serie de problemas como la incorporación de dirigentes sindicales en las listas de candidatos en el justicialismo junto con críticas al modelo económico, se produjeron un conjunto de desavenencias entre la presidenta y distintos sectores de la cúpula gremial. Este panorama, entre otros asuntos, derivó en que la CGT disidente, encabezada por el dirigente camionero junto con un sector de la CTA que responde a Pablo Micheli, realizase el primer paro general contra la administración kirchnerista en noviembre de 2012.¹⁴

Por último, también se fue modificando el comportamiento del gobierno frente al descontento social. Si bien en los primeros años fueron tolerados un número importante de enfrentamientos, a partir del segundo trimestre del 2005 no pocos reclamos comenzaron a ser reprimidos. En este sentido, la postura inicial se expresó en que las demandas salariales, en gran parte, fueron incorporadas en las negociaciones. Sin embargo, esta actitud fue cambiando al compás tanto de un conjunto de restricciones en la gestión económica como con la emergencia de una serie de organizaciones de base que cuestionaron los límites que se querían imponer a las protestas. De este modo, en numerosas ocasiones, las disputas fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad (trabajadores de la carne, Mafissa, LAFSA, Casino, petroleros de Santa Cruz) o bien, por matones a sueldo enviados por la cúpula sindical del sector involucrado (Hospital Garrahan, trabajadores del subterráneo, ferroviarios).¹⁵

A modo de breve conclusión

Si bien durante las últimas tres décadas el movimiento obrero ha transitado por distintas experiencias, su protagonismo en la historia reciente continúa vigente. A pesar de los embates sufridos por los diferentes gobiernos, los trabajadores han defendido sus conquistas sociales y han mantenido sus entidades nacionales, seccionales y de base. Sin embargo, este panorama no ha sido sencillo.

No cabe duda que el movimiento obrero en el nuevo milenio ha recobrado parte de su protagonismo histórico, más aún, si se lo compara con la ofensiva neoliberal de la década del noventa. A pesar de la mejora en los índices de ocupación, la clase obrera argentina continúa

¹³ Esto se reflejó en el hecho que la CGT, en una sola ocasión, convocó a un cese general de actividades de una hora, el mismo se hizo en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba por parte del gobierno neuquino en abril de 2007.

¹⁴ En los últimos años se han producido una serie de divisiones en las diferentes centrales obreras. De este modo, para fines de 2012, el gremialismo se hallaba dividido en cinco confederales; por un lado, la CGT oficial, la CGT disidente y la CGT Azul y Blanca; por el otro, la CTA oficial y la CTA opositora.

¹⁵ El hecho más representativo de estos acontecimientos fue el asesinato de Mariano Ferreyra, a manos de un grupo de hombres que respondían al dirigente ferroviario José Pedraza, durante una protesta sindical de los trabajadores terciarizados del ferrocarril Roca en octubre de 2010.

arrastrando varios problemas como la flexibilización laboral y la precarización del empleo. A eso se suma la presencia de una dirigencia sindical con fuertes rasgos burocráticos, alejadas de los intereses de sus representados y muy comprometida con el mundo de los negocios. Aunque existen hoy en día graves problemas en varias entidades laborales, el presente siglo encuentra en la Argentina una clase obrera con una fuerte presencia e inserción dentro de la sociedad.

Bibliografía

- Belardinelli, Pablo (1994). “El marco político de la conflictividad obrera”, en Ernesto Villanueva (coord.), *Conflicto obrero. Transición política, conflictividad obrera y comportamiento sindical en la Argentina 1984-1989*, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, pp. 103-149.
- Etchemendy, Sebastián; Collier, Ruth (2007). “Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003-2007)”, en *Politics and Society*, Vol.35, N°3, California.
- Ferrer, Nelson (2005). *MTA y la resistencia al neoliberalismo en los 90*, Dos orillas, Buenos Aires.
- Gaudio, Ricardo; Thompson, Andrés (1990). *Sindicalismo peronista/gobierno radical. Los años de Alfonsín*, Folios, Buenos Aires.
- Ghigliani, Pablo; Grigera, Juan; Schneider, Alejandro (2012). “Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato”, en *Revista Latino-americana de Estudios do Trabalho*, N° 27, Río de Janeiro, pp. 141-164.
- Iñigo Carrera, Nicolás (2001). “Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización”, en *Documentos de Trabajo* N° 33. Buenos Aires, PIMSA.
- Lozano, Claudio (Coord) (2012). *El empleo en el período 2003-2011. Un recorrido por la post-Convertibilidad*. IPyPP, Buenos Aires.
- Molinero, Leandro (2013). “La democracia del *Nunca más* y el movimiento obrero. La ocupación obrera de la planta Ford de General Pacheco en 1985”, en *Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, N° 2, Buenos Aires, pp. 55-75.
- Murillo, Victoria (1997) “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem”, en *Desarrollo Económico*, Vol. 37, N°147, Buenos Aires, pp. 419-446.
- Palomino, Héctor (2000). “Los sindicatos en la Argentina contemporánea”, en *Nueva Sociedad*, N°169, Caracas, pp. 121-134.
- Pozzi, Pablo; Schneider, Alejandro (1994). *Combatiendo al capital. Crisis y recomposición de la clase obrera argentina (1983-1993)*, El Bloque Editorial, Buenos Aires.
- Schneider, Alejandro (2013). “Política laboral y protesta obrera durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007)” en Juan Grigera (Comp.) *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 97-113.
- Senén González, Santiago; Bosoer, Fabián (2009). *Breve historia del sindicalismo argentino*, El Ateneo, Buenos Aires.
- Svampa, Maristella; Pereyra, Sebastián (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Biblos, Buenos Aires.
- Varela, Paula (2013). “Los sindicatos en la Argentina kirchnerista: entre la herencia de los 90 y la emergencia de un nuevo sindicalismo”, en *Revista Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, N° 2, Buenos Aires, pp. 77-100.
- Vázquez, Silvia (2005). *Luchas político educativas: el lugar de los sindicatos docentes*, CTERA, Buenos Aires.